

La sociedad civil “desorganizada”. Protestas y oposición en la sociedad civil a los gobiernos kirchneristas

The “disorganized” civil society.

Protests and civil society opposition to the Kirchner governments

Por Sergio De Piero* y Agustina Gradin**

Fecha de Recepción: 03 de junio de 2015.

Fecha de Aceptación: 19 de julio de 2015.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es realizar una aproximación al fenómeno de los procesos de movilización social en la Argentina actual, cuando los protagonistas son sectores sociales de sectores medios y medios altos, y cuyo objetivo es lograr que las políticas públicas se inclinen en otra dirección a la desarrollada hasta ese momento. Nos interesa establecer si las protestas protagonizadas por estos actores, y acontecidas durante los últimos años, dieron lugar a la emergencia de un movimiento social como sucedió en otras partes del mundo, por ejemplo España y el Movimiento de los Indignados (Castells, 2012). Para ello, desde una perspectiva sociopolítica y basada en el análisis de fuentes secundarias, describiremos la composición y las demandas de las protestas comprendidas entre el 13 de septiembre de 2012 y el 18 de abril de 2013, para contrastarla con su incidencia en las políticas públicas a nivel nacional. Sobre la

base de los desarrollos teóricos utilizados por Manuel Castells (2012) afirmaremos la no correspondencia de plantear que nos encontramos frente a la emergencia de un nuevo movimiento social, sino que estamos frente a un fenómeno que expresa dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, evidencia que a la multiplicidad y al contenido de las demandas emergentes, subyace una crítica global al kirchnerismo como proyecto político de gobierno. Y por otro lado, expresa la persistencia de la crisis de representación de los partidos políticos opositores como herramientas de canalización del malestar social emergente.

Palabras clave: Protestas sociales, Kirchnerismo, Sociedad civil.

ABSTRACT

The aim of this article is to approach the phenomenon of social mobilization processes in today's Argentina, where the protagonists are social sectors of middle and upper

* Doctor en Ciencias Sociales (UNQ), UBA/UNAJ/FLACSO. Correo electrónico: depiero@flacso.org.ar

** Magister en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO), CONICET/FLACSO. Correo electrónico: agradin@flacso.org.ar

middle, and aims to ensure that public policies are inclined in another direction the developed so far. We are interested in establishing whether protests by these actors, and took place during the last years, they led to the emergence of a social movement as in other parts of the world, such as Spain and the Occupy Movement (Castells, 2012). To do this, from a socio-political and based on the analysis of secondary sources perspective, describe the composition and the demands of the protests between the September 13, 2012 and April 18, 2013, to contrast with its impact on public policy at the national level. Based on the theoretical developments used by Manuel Castells (2012) affirm that does not correspond to state that we are faced with the emergence of a new social movement, but we are facing a phenomenon that expresses two distinguishable issues. On the one hand, evidence of the multiplicity and the content of the emerging demands lies a comprehensive critique of the Kirchner government as a political project. On the other hand, it expresses the continuing crisis of representation of opposition political parties as tools for channeling the emerging social unrest.

Keywords: *Social Protests, Kirchnerismo, Civil Society.*

Introducción

La movilización y ocupación del espacio público para la protesta y las demandas de respuestas por parte del Estado, son marcas notables del sistema político argentino y de su sociedad civil. Desde el retorno a la democracia en 1983, diversos actores han apelado a este recurso (Calderon y Jelin, 1987; García Delgado, 1989; Lechner, 1994; Forni, 2002; De Piero, 2005). Sin embargo, no todos lo hicieron con la misma intensidad ni del mismo modo, y ese uso también se

vio afectado por los tiempos políticos. Lo que representa una novedad es la movilización callejera de sectores socioeconómicos medios y medios altos (incluso altos) que habían recurrido en muy pocas ocasiones a esta herramienta (Paramio, 2012; Gómez, 2014). Estas expresiones parecen tener dos hechos clave que las conformaron y atravesaron: el ciclo de protestas que desembocó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y su posterior proceso de movilización social que incluyó asambleas barriales, piquetes y cacerolazos; y la conflictividad en torno de la Resolución ministerial 125 del año 2008¹.

La bibliografía desarrollada en nuestro país se ha centrado, y con razón por su envergadura, en las movilizaciones generadas por los sectores excluidos, desocupados y populares en general, las transformaciones del sindicalismo y de los partidos políticos tradicionales como mediadores sociales, la emergencia de los "nuevos movimientos sociales, su relación con el Estado y la capacidad, o no, de incidir en las políticas públicas².

En este artículo, nos interesa realizar una aproximación a este fenómeno cuando los protagonistas son otros sectores sociales, los

1 La Resolución del Ministerio de Economía N° 125, fue firmada en el año 2008, y establecía la implementación de retenciones móviles sobre las exportaciones de granos y oleaginosas; la medida fue resistida por los sectores del agro, como ya veremos.

2 Véase Farinetti (1999), Schuster y Pereyra (2001), Auyero (2002), Svampa y Pereyra (2003), Lobato y Suriano (2003), Massetti (2004), Delamata (2004), Merklen (2005), Schuster *et. al.* (2005), Svampa (2005, 2008), Pereyra (2008), Pereyra *et. al.* (2008), Pérez y Natalucci (2012).

sectores medios y medios altos³, pero cuyo objetivo es semejante: lograr que las políticas públicas se inclinen en otra dirección a la desarrollada hasta ese momento. A su vez, nos interesa establecer si las protestas protagonizadas por estos actores, y acontecidas durante los últimos años, dieron lugar a la emergencia de un movimiento social como sucedió en otras partes del mundo, por ejemplo España y el Movimiento de los Indignados (Castells, 2012). Para ello, desde una perspectiva sociopolítica y basada en el análisis de fuentes secundarias⁴, vamos a describir la composición y las demandas de las protestas comprendidas entre el 13 de septiembre de 2012 y el 18 de abril de 2013, para contrastarla con su incidencia en las políticas públicas a nivel nacional. En un primer momento, recuperaremos sus antecedentes y el contexto en cual se desplegaron sus discursos, demandas, modalidades de protesta y formas de organización. Seguidamente, reflexionaremos en torno a la caracterización de este tipo de movilizaciones callejeras de

protestas y su impacto en el sistema político argentino, sobre la base de los desarrollos teóricos utilizados por Manuel Castells (2012) para analizar los procesos de movilización en Europa y África de los últimos años. En las conclusiones, afirmaremos que no corresponde plantear que nos encontramos frente a la emergencia de un nuevo movimiento social sobre la bases de las protestas analizadas, sino que estamos frente a un fenómeno que expresa dos cuestiones diferenciables. Por un lado, evidencia que a la multiplicidad y al contenido de las demandas emergentes, subyace una crítica global al kirchnerismo como proyecto político de gobierno. Y por otro lado, expresa la persistencia de la crisis de representación de los partidos políticos opositores como herramientas de canalización del malestar social emergente.

1. Movilizaciones sin conducción. Breves antecedentes

El retorno de la democracia en 1983, es tomado como punto de partida para analizar diversos fenómenos sociales actuales. A medida que transcurrieron los años la conflictividad y las demandas sociales tendieron a tornarse más complejas y heterogéneas; así, organizaciones y movimientos de la sociedad (algunos ya existente, otros emergentes) comenzaron a ganar protagonismo como canales de expresión. En esa misma década se hizo mención al surgimiento de nuevos movimientos sociales (Jelin, 1985)⁵. En particular la dinámica de

3 Utilizaremos indistintamente los conceptos de clase media y sectores medios. Sin embargo, en ambos casos, los definimos siguiendo a Adamovsky (2009), donde en Argentina, los sectores medios de la sociedad no conforman una clase social ni un grupo política o económicamente homogéneo, pero sin embargo la mayoría la sociedad argentina dice pertenecer a la clase media, y se encuentra identificado con una identidad caracterizada por rasgos antipopulares y clasistas.

4 La estrategia metodológica se basó en el análisis de notas periodísticas publicadas en los principales Diarios nacionales *Clarín*, *Página 12* y *La Nación* durante el periodo analizado (del 10 de septiembre de 2012 - 19 de febrero de 2015), y en el análisis de estudios de opinión realizados por consultoras privadas para otros fines. El análisis se complementó con una revisión bibliográfica sobre la temática.

5 Podemos hacer referencia también a otras expresiones que no se enmarcaban en los estudios de los nuevos movimientos sociales. Quizás un antecedente a rescatar, en este sentido, sea la cuestión que suscitó los tratamientos con *Crotovina* en el año 1986. Un grupo de médicos anunció que había diseñado una droga capaz de ayudar en la cura contra el cáncer. Los tratamientos ya se estaban llevando ade-

la década del '90, incluyó profundos cambios en la matriz de la relación Estado - sociedad, muy particularmente en las instancias de mediación entre ambos espacios. En cuanto a la relación con los partidos políticos y el resto de las instituciones, ya desde inicios de la década se habló de una crisis de representación (Dos Santos, 1992; García Delgado, 1994). A su vez comenzaron a multiplicarse los casos de organizaciones y movimientos sociales, que adquirirían un gran protagonismo en torno de ciertas demandas que se presentaban en el espacio público. A partir del año 1996, surgen los piquetes como forma de protesta de las organizaciones de trabajadores desocupados en diversos puntos del país. Esta práctica, que emergió ante la ausencia de respuestas estatales a la crítica situación social, alcanzó después un alto grado organizativo, bajo lógicas sindicales y políticas, convirtiéndose en actores clave de la crisis de los años 2001-2002. Al mismo tiempo, un conjunto de organizaciones sociales, con diversa capacidad de acción, se fue articulando en el territorio para dar respuestas inmediatas a la crisis⁶. Eran los intentos de los sectores que sufrían un proceso de exclusión, por encontrar respuesta a demandas que el mercado no buscaba atender (más bien lo contrario) y el Estado demoraba en su respues-

lante cuando el tema tomó estado público, lo que provocó un gran revuelo. Al demostrarse que la droga no era eficaz en el tratamiento el gobierno prohibió su comercialización, lo que generó la protesta de personas enfermas de cáncer, las cuales realizaron marchas de protesta ante el Ministerio de Salud y Acción Social. Un análisis sobre este caso en De Ipola, 1990.

6 Mediante sociedades de fomento, clubes deportivos, los "Clubes del Trueque", organizaciones que crecían al calor de programas focalizados de políticas sociales, etc.

ta o lo hacía con una moderación intolerable (Forni, 2002).

Junto a este tipo de demandas, ubicadas dentro de lo que se denominó la nueva cuestión social, surgieron también otras de diverso tipo. Estas no componían temas desconocidos ni "nuevos", sino que lo innovador era que se expresaran con la ocupación del espacio público, cuando hasta ese momento corría por lógicas individuales, judiciales, etc. Así, por ejemplo, las dos tragedias aéreas de la década del '90⁷, generaron acciones novedosas por parte de los familiares y amigos de las víctimas: se vincularon para reclamar justicia por lo sucedido, y decidieron realizar concentraciones, peticionaron a las autoridades, concurren a los medios de comunicación, se informaron sobre el tema en cuestión y la responsabilidad de las empresas y desde luego litigaron; y ello en buena parte lo realizaron a través de un colectivo. Hicieron escuchar su voz, en un doble sentido: como la identidad de víctima, desde la cual levantaban su reclamo y a la vez lo realizaban bajo un colectivo, algo difuso, pero que se referenciaba claramente en el hecho trágico que los había vinculado repentinamente. La situación de víctima como identidad, comenzó a ocupar el espacio público desde diferentes realidades: tragedias naturales, personas asesinadas a causa de secuestros o en situaciones de robos (es decir víctimas de la denominada "inseguridad"), accidentes de tránsito, personas que sufrían alguna discapacidad o enfermedad crónica, familiares de jóvenes con adicciones a drogas, entre otros. Surgieron no pocas organizaciones que en general buscaron

7 Se trata del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas que se estrelló en la Ciudad de Fray Bentos, Uruguay, el 10 de octubre de 1997, y el vuelo 3142 de LAPA, que se estrelló antes de despegar en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires el 31 de agosto de 1999. Fallecieron 74 y 65 personas, respectivamente.

instalar los temas en el espacio público a través de la protesta y la visibilización en los medios de comunicación masivos. Sus demandas no podían ser canalizadas ni por los partidos políticos ni por los sindicatos; pertenecían a otra dimensión que lo salarial, y el grado de especificidad, las volvía complejas de ser articuladas por los partidos, menos aún en un proceso de crisis de representatividad, que esta situación tendía a profundizar. Ese mismo año de 1999, un prolongado apagón en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, generó protestas y cortes de calles por parte de varios afectados.

La víctima, que se impuso a la noción de ciudadano sujeto de derecho, se convertía en un eje sobre el cual el Estado debía dar respuestas, por su misma condición de sufrir una situación considerada injusta. Pero mientras que en décadas anteriores, injusticias semejantes podían ser procesadas en términos políticos, la mayor parte de estas organizaciones y movimientos, algunos de ellos esporádicos, perseguían en este contexto histórico, la respuesta focalizada a su demanda, sin planteos políticos más amplios, que implicaran una definición de las pautas que el neoliberalismo, había impuesto en particular acerca del rol del Estado. A este, en todo caso, se lo cuestionaba indirectamente al plantear que acrecentara su presencia, pero no había detrás de ello un discurso político con capacidad articuladora, ni actores que encararan esa tarea. Los cuestionamientos iniciales referían a la necesidad de dar respuesta, pero no que ello implicara un cambio político por parte de la orientación general del Estado. Este punto es relevante porque dichos reclamos convivían con la conformación de los grupos piqueteros, asambleas, etc., que sí exigían cambios políticos sustanciales y muchos de ellos optaron por la vía electoral o se acoplaron a partidos políticos ya existentes.

La heterogeneidad de la sociedad civil se ha convertido en una marca de los tiempos presentes. Cierta homogeneidad que caracterizó a la sociedad civil del siglo XX, se expresó

en la presencia de espacios políticos con fuerte capacidad agregativa y organizativa respecto de las demandas, frente a los poderes públicos, partidos políticos y sindicatos, fueron herramientas clave en este sentido. Pero cuando la diferencia parece ocupar un rol central en la definición de la sociedad civil (Grimson, 2013) incluso en tensión con la noción de la igualdad, la representación de ese componente se torna más compleja. Lo específico, la búsqueda de la aceptación e inclusión de la diferencia, hace más difícil la construcción de una partido capaz de englobar esas demandas⁸. La crisis del 2001 fue en parte una resultante de esa situación. Se la llamo “la rebelión de los fragmentos” (Sidicaro, 2006), porque el grado de espontaneidad y ausencia de conducción política en el mes de diciembre de ese año, fue una marca que evidenciaba la imposibilidad inmediata de ordenar esos reclamos, bajo algún tipo de lógica organizativa y conducción política. En esa experiencia, por otra parte, los sectores medios urbanos utilizaron la ocupación de la calle como una herramienta de protesta a la que sólo se habían acercado enmarcada en partidos políticos o de manera fragmentaria ante hechos muy puntuales (como algunos de los que mencionamos). El cacerolazo de la noche del 19 de diciembre, pero en particular la aunque efímera, no por eso menos interesante experiencia de las asambleas barriales durante todo el verano de 2002 (y, según los casos, algunos años más también), se convirtieron en un “bautismo de fuego” para muchos ciudadanos, una experiencia de participación democrática, más intensa que la emisión del voto o la mera discusión cotidiana. El descubrimiento que la ocupación del espacio público (que implicaba cortar calles, interrumpir el tránsito, marchar junto a des-

8 La resolución en parte de esta complejidad explica el éxito electoral del Kirchnerismo, cuestión que será retomada en las conclusiones.

conocidos), se convirtió en una experiencia que dejó su huella. A ese impacto también debe sumarse conocer la práctica participativa para muchos sectores que nunca se habían acercado a instancias semejantes: tomar decisiones, ordenar el uso de la palabra, votar, fueron también aprendizajes para algunos de ellos (Triguboff, 2015)⁹.

2. El después

Así, el clima generado en torno de los sucesos del año 2001, permaneció e impactó en los distintos sectores sociales, con una permanencia que tal vez no estemos en condiciones de definir. Lo cierto es que ante nuevos hechos que fueron valorados como relevantes, por distintos ciudadanos, la ocupación y expresión en el espacio público empezó a tornarse una práctica usual. El peso de las demandas específicas, focalizadas, creció en diversos espacios de sociedad. Movimientos, protestas con reclamos de diverso tipo, comenzaron a hacerse presentes en el espacio público y a demandar soluciones de parte del Estado. La llegada al gobierno de Néstor Kirchner despertó rápidamente una particular expectativa, en cuanto a la posibilidad de que esas demandas fuesen atendidas. Así, un presidente electo con tan sólo el 22% de los votos, comenzó ampliar su base de apoyo a través de diversas medidas y

gestos políticos, que despertaron nuevas adhesiones y respondiendo a algunas de esas demandas (De Piero, 2009).

El concepto de populismo (Laclau, 2005), vino a explicar (nuevamente) este fenómeno político, que involucraba ciertas redefiniciones del sistema político y en particular el tipo de mediaciones desde este, con el conjunto de la sociedad civil. Como señala Biglieri (2010) la productividad política del nuevo gobierno, generó una amplia expectativa social y reubicó al sistema político - institucional en el primer plano de las cuestiones sociales, lo cual abrió un nuevo panorama político para todos los actores del sistema. La percepción inicial, por lo menos de la mayoría de los actores sociales y políticos de ese momento histórico, fue que se encontraban frente a un cambio tanto en el discurso presidencial como, particularmente, en la relación entre el Estado y la sociedad. En este marco, el gobierno viró la estrategia con respecto a las demandas emergentes, de la represión utilizadas en torno de la crisis del 2001, a la incorporación de las demandas en la agenda política bajo su mandato (Mauro, 2014; Gradín, 2013). A su vez, nos parece importante repetir, una vez más, que este giro en la construcción de la relación entre Estado y sociedad no implicó modificaciones en la estructura institucional propia de las democracias liberales, sino la generación de otras instancias de mediación política que conviven con aquellas, donde “el populismo se convierte en un acompañante espectral de la política liberal-democrática (Arditi, 2004, citado por Biglieri y Perelló, 2007: 15).

Sin embargo esa construcción no fue inmediata y no todas las demandas lograban estructurarse del mismo modo. Nos referimos específicamente a todas aquellas que provenían de las particularidades que ya señalamos en el apartado anterior. Quizás pueda tomarse como el primer antecedente de ellas, la movilización que sucedió el 1 de abril de 2004, cuando Juan Carlos Blumberg, convocó a

9 El autor señala que uno de los procesos más interesante de las asambleas barriales de aquellos años, fue la convergencia entre el conflicto y la articulación, de los militantes políticos activos, aquellos que tenían alguna experiencia de militancia años atrás y quienes jamás lo habían hecho. El modo en que se resolvió esa cuestión, impactó directamente en la forma que tomó la asamblea (Triguboff, 2015, especialmente capítulo III). Indica también que la mayor parte de las asambleas se constituyeron en barrios de clase media y media alta.

una marcha pidiendo por “seguridad”, luego de que su hijo fuese secuestrado y asesinado. Esa convocatoria reunió a un número que rondó las 130.000 personas según los diarios de la época. La marcha se realizó por fuera de los partidos políticos, sin que estos movilizaran estructuras, más allá de algunos espacios menores. La demanda fue acotada al pedido de mayor seguridad, con una agenda que pugnaba por el aumento de las penas y la mayor presencia policial en las calles. Luego de esta concentración y hasta el año 2005, Blumberg convocó a otras cuatro marchas con suerte despareja, bajo las mismas consignas. Dada la capacidad de convocatoria en las primeras concentraciones, algunos actores del sistema político se acercaron a él y el propio presidente Néstor Kirchner lo recibió en la Casa Rosada. Tal fue el impacto que logró generar bajo la agenda de la “inseguridad”, que por la presión de estas marchas y su presencia permanente en los medios de comunicación, el Congreso Nacional modificó distintas leyes penales, que apuntaban al endurecimiento de penas. Conseguidos los cambios en las leyes y algunas políticas de seguridad específicas, la capacidad de movilización mermó. Finalmente Blumberg se volcó a la opción electoral, donde su fracaso fue estrepitoso¹⁰.

El cuestionamiento también atravesó a algunos movimientos sociales, que los interpelaron en un parte aguas, dado que el tema “seguridad” implicaba hechos graves, pero no era arribado desde la perspectiva de la ampliación de derechos, propia de los movimientos sociales, sino de una visión más represiva. En este sentido, se presenta una división cuando los reclamos por mayor seguridad en sectores populares, implica el accionar de la policía como

responsable directa de los homicidios. En un sentido semejante, cabe recordar la tragedia de República Cromañón en diciembre de 2004, donde murieron 194 jóvenes¹¹. En este caso las víctimas provenían en general de sectores populares y también produjo una importante capacidad movilizadora durante varios años, lo cual no estuvo exento de numerosas fracturas al interior de este grupo, acerca del contenido y las formas de la protesta y la acción judicial¹².

Otro antecedente lo constituyen las protestas y manifestaciones del año 2008, en torno de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que afectaba el modelo de retenciones. Las cuatro cámaras patronales (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO)¹³ conformaron una “Mesa de Enlace”, unificando su posición frente a la política del gobierno, y llevando adelante una estrategia conjunto de lucha para impedir que la Resolución entrara en vigencia. El despliegue que la Mesa de Enlace logró en todo el país fue inédito: se cortaron rutas nacionales y provinciales, se derramaron miles de litros de leche y se destruyó cosecha, en el

10 En el año 2007, Blumberg se presentó como candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Vamos y obtuvo únicamente el 0,98% de los votos.

11 La tragedia de Cromañón hace referencia al incendio del boliche el día 30 de diciembre de 2004, donde fallecieron 194 jóvenes que estaban participando de un recital de música. Por el hecho, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue sometido a juicio político y destituido de su cargo. La tragedia puso en evidencia la trama de corrupción que se tejía alrededor de la habilitación de locales nocturnos.

12 Las protestas y la acción de los partidos opositores terminaron por destituir, a través del primer juicio político, al entonces Jefe de Gobierno porteños, Aníbal Ibarra.

13 Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Confederación Interooperativa Agropecuaria.

punto más crítico, buena parte del interior del país sufrió desabastecimiento de diversos insumos. Además de estas acciones que le acrecentaron su poder, el apoyo de buena parte de los sectores medios urbanos, no vinculados al reclamo específico de lo que implicaba la resolución 125, se convirtió en un recurso de poder notable para el sector patronal agrario. Así, el 25 de marzo de 2008, luego de un discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendiendo la medida, se produjeron manifestaciones en diversas ciudades del país apoyando a la Mesa de Enlace, y con un fuerte tono opositor al gobierno (Balan, 2014; Muzlera, 2009). El 14 y el 16 de junio se realizaron nuevos "cacerolazos", donde ya podía notarse el apoyo de diversos partidos políticos, incluso de sectores de izquierda, mientras el desabastecimiento se transformaba en un problema cada vez más grave. Mientras ello, el oficialismo también apeló a la ocupación del espacio público y convocó a marchas de apoyo en la Plaza de Mayo. Cuando la situación tomó estado parlamentario, y antes de su rechazo en el Senado el día 16 de julio, el gobierno realizó una marcha en la Plaza de los dos Congresos, mientras que la "Mesa de Enlace", efectuó una concentración sobre la Avenida del Libertador en el barrio de Palermo, también en la Ciudad de Buenos Aires. La 125, quedó anulada por su falta de apoyo en el Congreso (aprobada en Diputados, pero rechazada en el Senado) sin embargo un efecto notable, fue la capacidad de movilización que logró desplegar por parte de sectores que en algunos casos, nunca habían recurrido a la acción callejera como herramienta política. El mayor logro de la "Mesa de Enlace", fue justamente el de lograr galvanizar una alianza entre sectores propietarios de diversa extracción (medianos con grandes) y el apoyo de un importante sector de la clase media totalmente ajeno a los intereses específicos del

"campo", pero identificado por su rechazo al gobierno nacional, y quizás al peronismo en términos generales. El poder simbólico de identificación del "campo" con los "orígenes y la esencia de la patria" jugó también un rol a considerar.

En esta línea puede decirse que los sectores sociales movilizados, ubicados tal vez de la mitad hacia arriba de la pirámide socioeconómicamente hablando y con un fuerte discurso opositor, lograron a partir de aquí la apropiación del "cacerolazo" como herramienta de protesta propia. La cacerola, que en el contexto del 2001 si bien fue utilizada por sectores medios, podía ampliarse a otros y tener como destinataria el rechazo a una situación política y económica crítica, ahora quedaba como símbolo de protesta de un sector social y político definido de modo más acotado, e incluso como argumento de una supuesta autonomía, en contra de los aparatos políticos y sindicales. La cacerola, vinculada a la vida cotidiana, hogareña, despolitizada de cualquier tradición, parece contrastar con el uso de los bombos y redoblantes u otros instrumentos cargados de simbología política. Ante la generación de un espacio difuso, un instrumento ambigüo puede convertirse en una opción acertada.

De la mano de las cacerolas llegó el nuevo ciclo de protestas. Luego del momento crítico del conflicto por la 125, el kirchnerismo sufrió la muerte de Néstor Kirchner; sin embargo un año después Cristina Fernández de Kirchner era reelecta presidenta con el 54% de los votos, marcando un nivel inédito. El segundo candidato se ubicó 38 puntos por debajo; la oposición que logró el control de espacios subnacionales, gobernando algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no lograba construir un armado nacional para enfrentar al kirchnerismo. Las protestas que habían ocupado calles con miles de personas, no tenían ninguna traducción polí-

tica, ni habían implicado cambios notables en la orientación de las políticas públicas¹⁴.

3. La protesta sin mediación

El escenario del contundente triunfo electoral del Frente para la Victoria en octubre de 2011¹⁵, pudo hacer suponer que la conflictividad expresada en el primer mandato de Cristina Fernández, entraría en una etapa de cierta calma política y social; también que ese aval electoral (repetimos, inédito en el retorno democrático) implicaría algún grado de acuerdo social sobre el rumbo político y económico. No fue así. El nuevo mandato presidencial comenzó con un fuerte malestar social de la clase media, media alta y alta sobre la política de restricción de venta de divisas operada por el gobierno, y por los anuncios de recortes de subsidios a servicios públicos como el gas, la luz, y el transporte, que beneficiaban principalmente a estos mismos sectores, concentrados en el AMBA. El 22 de febrero de 2012 la “tragedia de Once” irrumpe en la escena política nacional, poniendo en debate no sólo la política ferroviaria y de transporte del gobierno, sino también su relación con los principales actores económicos de la misma y las tramas de corrupción con respecto a los subsidios públicos que recibía la empresa que operaba el servicio, como así también sectores del sindi-

cato¹⁶. Se puso, así, en debate la relación del Estado nacional con las empresas privadas en el marco de las políticas de subsidio a los servicios públicos¹⁷. Si bien las principales víctimas fueron los sectores medios y medios bajos que utilizan este tipo de servicio, la tragedia suscitó la solidaridad y la sensibilización de otros sectores sociales, que se movilizaron en algunas instancias, acompañando la demanda de justicia por parte de las víctimas y sus familiares¹⁸. La figura de las víctimas y sus familiares, como en la tragedia de Cromañon y otros casos ya mencionados, habilitó nuevamente un proceso de organización y movilización social que tuvo sus consecuencias en la intervención estatal al respecto. La empresa TBA fue, primero, intervenida por el Estado quién posteriormente decidió rescindir su contrato, y el Secretario de Transporte fue separado de

14 Si bien el gobierno no logró implementar las retenciones móviles, estas no fueron reducidas, como se especulaba ocurriría, luego de los hechos en torno de la 125.

15 En las elecciones presidenciales de 2011, Cristina Fernández (FPV) ganó con el 54,11% de los votos y con una diferencia de casi 38 puntos con el candidato que obtuvo el segundo lugar.

16 Por la “tragedia de Once” se conoció al accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas que viajaban en el tren Sarmiento hacia la Capital Federal. Actualmente hay una causa penal que involucra al conductor y a ex funcionarios de la Secretaría de Transporte.

17 Este incidente tuvo tres antecedentes en durante los gobiernos kirchneristas que fueron analizados profundamente por Pérez y Rebón (2012). Tres estallidos sociales de pasajeros de trenes metropolitanos se sucedieron en Haedo (2005), Constitución (2007) y Castelar (2008). Ninguno de estos hechos tuvo impacto relevante en la política ferroviaria.

18 Los días posteriores a la tragedia se sucedieron un número importantes de movilizaciones, concentraciones y bocinazos pidiendo justicia por las víctimas. <http://www.lanacion.com.ar/1453464-lagrimas-de-los-familiares-y-quejas-al-gobierno-en-la-plaza-de-mayo>

su cargo¹⁹. Si bien hubo una intervención del Estado con respecto a la demanda de justicia y de mejoramiento del servicio, la tragedia de Once atravesó todo el año 2012, dando pie a una serie de protestas contra algunos aspectos de la política gubernamental, que analizaremos en los siguientes apartados.

Por lo pronto, podía observarse que existía un clima hostil y de rechazo al gobierno nacional, en particular entre los sectores medios y altos que se moldeó al calor de la administración del tipo de cambio (lo que los medios de comunicación dominante llamaron “cepo”), la desaceleración del crecimiento y la suba de la inflación. Pero estos sectores tampoco, y de allí la “desorganización”, encuentran en los partidos de oposición una representación a sus reclamos, ni contaban en ese momento con un liderazgo nacional alternativo. Cuando no existe un partido ni un liderazgo capaz de condensar, de “encontrar las equivalencias” entre esas demandas, estas protestas se presentan aunque contundente, de manera algo caótica. Se inicia así, una serie de “cacerolazos”: el 13 de septiembre de 2012 se realiza el primero con una alta adhesión en los principales centros urbanos, que lo instala como la principal movilización opositora al gobierno; el 8 de noviembre de 2012 se repite la convocatoria, realizándose, tal vez, el cacerolazo que reunió a la mayor cantidad de gente. Al año siguiente, se inicia la campaña electoral y en ese marco el cacerolazo del 18 de abril de 2013 tiene una adhesión moderada, pero con mayor visibilización de partidos políticos opositores.

De este modo, establecido el proceso sociopolítico en el cual se desarrolla nuestro fe-

nómeno de estudio, en el próximo apartado sistematizaremos los reclamos y demandas de carácter específico, y su impacto en las políticas públicas y en el escenario electoral del periodo analizado.

4. Las implicancias de las movilizaciones

Las características del ciclo de movilizaciones abiertas con la concentración del 13 de septiembre de 2012 (13S) suponen un desafío para pensar el sistema político argentino en la actualidad. Como veremos en este apartado, la heterogeneidad de sus demandas, la ausencia de un interlocutor definido, la masividad de su concurrencia y la amplificación de sus reclamos por parte de los grandes medios de comunicación y buena parte de la oposición política, imponen analizar sus efectos en dos niveles. Por un lado, en el nivel de las políticas públicas. Es decir, si el Estado se hizo eco de estos reclamos, de modo tal que canalizara las demandas concretas de las movilizaciones a través de la modificación de la agenda estatal, y si lo hizo de qué modo. Y por otro lado, en el nivel de la representación política. Es decir, si impactaron, y cómo, en los armados políticos oficialistas y opositores.

4.1 Las demandas emergentes

Si nos centramos en los puntos específicos de las demandas, el 13S expresó, según algunos trabajos de investigación (Gold, 2015; Mauro, 2014; Gamallo, 2013) el rechazo a la sospecha de un proyecto de reforma constitucional impulsado por el Kirchnerismo que suponían habilitaría la posibilidad de una nueva elección presidencial (la tercera en este caso), así como el rechazo al “cepo”²⁰ sobre la compra de divi-

19 El gobierno, después de la tragedia, decidió remover de su cargo al Secretario de Transporte Juan José Schiavi, reubicando la secretaria de transporte dentro del Ministerio de Interior, y rescindirle el contrato a la empresa titular del servicio.

20 Se denomina “Cepo”, a la política de control de compra y venta de divisas en Argentina, que implementó el Ministerio de Economía

sas para ahorro, y a los casos de corrupción que habían salpicado al gobierno de Cristina Fernández. Según el diario *La Nación*, esta expresión “espontánea” de la sociedad civil se constituyó en “la mayor manifestación de protesta antikirchnerista” (*La Nación*, 13/09/2012).

Como señala Gómez (2014) para el caso específico del 8 de noviembre de 2012 (8N), los reclamos y demandas individuales de los participantes referían principalmente, y más allá del discurso instalado mediáticamente, a cuestiones vinculadas a las posibilidades de capitalización y desarrollo económico de las clases medias, más que sobre cuestiones cívicas y morales. En esta oportunidad, la “espontaneidad” no fue el rasgo distintivo, sino que era evidente la organización previa y durante la movilización, así como la participación, aún sin banderas partidarias, de algunos sectores de la oposición.²¹

En el caso del 18 de abril de 2013 (18A) las organizaciones políticas opositoras fueron un actor fundamental de las movilizaciones

donde imperó el rechazo por el proyecto de reforma judicial y por la “corrupción” del gobierno y el reclamo por mayor seguridad (*La Nación*, 9/08/2013)²². La cercanía a las elecciones de medio término urgía al sistema político a intentar canalizar “las protestas ciudadanas” (*La Nación*, 18/04/2013) por lo que algunos sectores de la oposición participaron activamente de la convocatoria, la organización y el desarrollo de las mismas. Sin embargo, según una encuesta de opinión pública realizada por la consultora CEIS durante las movilizaciones, el 67% de los encuestados declaró interesarle bastante y mucho la política, solamente el 2% declaró tener una militancia partidaria mientras que el 77,4% declaró no sentirse identificado con ningún partido político. En este mismo sentido, el 43% declaró no preferir a ningún político como representante a nivel nacional, mientras que el 57%

desde finales del año 2011. A partir de esta normativa, las personas que quisieran comprar divisas para ahorro personal, deberían presentar una solicitud a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, para que esta autorice la operación, de acuerdo a los ingresos declarados por el solicitante. Decisión enmarcada en problemas de restricción externa de la economía argentina y necesidad de evitar la fuga de divisas.

21 En este aspecto la oposición se dividió y mientras algunos participaron activamente (por caso el PRO de Mauricio Macri) otro se hicieron eco de la idea de “respetar las expresiones ciudadanas” y movilizaron en forma anónima (en particular los sectores pertenecientes a la Unión Cívica Radical, principal partido opositor y a la coalición FAP, Frente Amplio Progresista, con preponderancia del Partido Socialista).

22 La “reforma judicial” impulsada por el oficialismo consistía en un proyecto de ley basado en seis puntos clave de reforma del sistema judicial. De esos seis puntos, hubo dos que generaron rechazos y polémica, ya que se suponía que atentaban contra la independencia judicial. El primero consistía en una reforma del Consejo de la Magistratura, mediante la cual sus miembros pasarían a ser elegidos por voto popular y no deberían ser necesariamente abogados para acceder a su postulación, respetando la pluralidad establecida por la Constitución de 1994. El segundo punto implicaba la regulación de las medidas cautelares contra el Estado Nacional, implicando un límite temporal de seis meses para que ellas caducaran, y un límite casuístico a aquellos casos en que estuviera en riesgo la vida o la libertad de las personas. Estas dos medidas eran vistas por los opositores al gobierno como una tentativa oficial por controlar la independencia judicial (Gold, 2015: 200).

restante se fragmentó entre la oposición sin construir una opción competitiva.

En síntesis, podría decirse que, aún en el alto grado de heterogeneidad de las voces que convocaron y se hicieron presentes, las demandas podrían resumirse en: el rechazo a una posible nueva reelección presidencial²³, el control en la compra y venta de divisas ("cepo"), la suba de la inflación, la corrupción y la inseguridad; en conjunto constituían los emergentes y los mensajes de las manifestaciones de oposición al gobierno. ¿Cuál fue la agenda central de estas protestas? Podría decirse que cuentan con un relato enmarcador, de donde se derivan estos reclamos puntuales. El marco es la concepción del kirchnerismo (acaso del peronismo) como un movimiento antirepublicano (que se caracterizaría por no cumplir los procedimientos ni respetar la división de poderes), y a su vez, por ser un gobierno corrupto (lo que implicaría que sus funcionarios se enriquecen con negocios públicos). Anti-republicano y corrupto, forman un par que otros gobiernos de matriz peronistas han recibido en distintas épocas, claramente los dos primeros gobiernos de Perón²⁴. En este sentido, el kirchnerismo, en tanto régimen populista, es criticado por un supuesto avasallamiento de las instituciones republicanas, lo cual, consecuentemente, deriva en un uso discrecional del aparato del Estado, a favor del enriquecimiento personal, el clientelismo como modo central de relación en las políticas sociales, y la cooptación de gru-

pos políticos a cambio de prebendas (Novaro, 2011). Esta interpretación del kirchnerismo ha logrado una importante repercusión en distintos sectores sociales económicos y culturales. Está, como ya se ha dicho respecto de los populismos, cargado de imprecisiones (Lacau, 2005), pero cumple sin dudas un rol pedagógico en la interpretación de un fenómeno político complejo (Casullo, 2013).

4.2 El impacto en las políticas públicas

Con respecto al impacto en las políticas públicas, la multiplicidad de demandas y la ausencia de un interlocutor único que sintetice, exprese y represente las movilizaciones callejeras expresadas en el ciclo 13S - 8N - 18A, dificulta otorgarle un sentido político unívoco a las mismas y por lo tanto la posibilidad de ser traducida en una política pública. Estos procesos de movilización se dan en un marco donde los resultados electorales de 2011, pone a los partidos políticos opositores en la situación de tener que crecer en representatividad y legitimidad a partir de la expresión del malestar y de la protesta social. Como señala Gamallo (2012):

los niveles presentes de conflictividad social están asociados a la táctica desarrollada por las agrupaciones opositoras luego de su contundente derrota electoral. (...) las acciones de este híbrido conglomerado social (como vimos, conformado no sólo por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y corporaciones económicas), trasladaron (complementaron) el centro de operaciones desde el sistema político institucional hacia la ocupación del espacio público, a partir de personificaciones variadas y reivindicaciones heterogéneas, pero con un trasfondo político común: una táctica de confrontación permanente hacia el *kirchnerismo* (Gamallo, 2012: 879).

23 Que, repetimos, no había sido expresada públicamente por el gobierno, e incluso la Presidenta de la Nación había dicho que ella no presentaría ningún proyecto al respecto.

24 Recuérdese el reiterado uso en la bibliografía del término "régimen peronista" reemplazando la denominación de "gobierno peronista", y de este modo estableciendo a los gobiernos de esta extracción, una clasificación por fuera del régimen democrático.

Esto implica, como mencionamos anteriormente, que expresan un rechazo general a un estilo de gobierno (calificado de anti - institucional y corrupto) cuyas expresiones serían: el intento de permanecer en el Poder Ejecutivo por un nuevo mandato, limitar la “libertad” de compra de dólares y dejar crecer la inflación, la corrupción y la inseguridad. Las argumentaciones se sostienen y legitiman mutuamente, en un discurso que, sin embargo, no logra construirse en un proyecto alternativo de gobierno, expresado por un actor político emergente del proceso. Esto, sin embargo, no implica que las protestas no hayan impactado en la acción política del Kirchnerismo.

Del abanico de cuestiones expresadas en las protestas, podemos decir por una parte que el gobierno no avanzó en la reforma constitucional que habilitaría la reelección (propuesta sobre la que sólo se habían expresado algunos pocos referentes políticos del espacio kirchnerista). La regulación de la venta de divisas, no se modificó en lo inmediato, aunque posteriormente, hacia el 2014, se presentaron algunas flexibilizaciones. Con respecto a la inflación, en noviembre de 2013 renuncia el Secretario de Comercio Interior, dando lugar a un proceso de reformulación del INDEC y de los índices de precios para, en febrero de 2014, lanzar un programa nacional de control de precios que regule la inflación en la canasta básica de alimentos. De todos modos debe tomarse en cuenta que el gobierno estableció una devaluación del peso entre enero del 2013 y enero del 2014 que llegó al 60%. Luego de esta medida que puede vincularse a una matriz ortodoxa, la política de control de la inflación asume un perfil claramente heterodoxo, bajo la mencionada política de control de precios.

En cuanto a la seguridad, un tema cuya complejidad no es necesario remarcar aquí, el gobierno nacional había creado en el año 2010 el Ministerio de Seguridad de la Nación y el marzo de 2012 nombra a Sergio Berni como Secretario de Seguridad, quien asume un dis-

curso que en cierta medida se va a identificar con las protestas sobre este tema. Recordemos que en octubre de 2012 estalla otra cuestión, las protestas de gendarmes y prefectos por aumentos salariales, que si bien no tiene relación directa con los hechos aquí analizados, aportará su cuota a ese clima de época. Estos acontecimientos desembocaron en la renuncia del Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, y hermano de la Ministra Nilda Garré, quien posteriormente en mayo de 2013 es removida de su cargo por decisión de la titular del Poder Ejecutivo. En diciembre de 2013 se llevaron a cabo huelgas de policías en diferentes provincias que desencadenaron saqueos de supermercados en algunas ciudades, en el marco de las protestas por la recomposición salarial de los agentes.

Por último, los casos de corrupción denunciados por los manifestantes se encuentran en manos del Poder Judicial, y cuentan con el seguimiento de los medios de comunicación concentrados. La denuncia genérica de corrupción es difícil de inscribir como una cuestión política en sí misma, sino que es utilizada para criticar solapadamente otras políticas del gobierno. En este sentido, consideramos que

la instalación de la corrupción en la agenda pública, así como la concepción particular que predomina sobre ella, se encuentran motorizadas principalmente por el neoliberalismo. En efecto, existen razones teóricas y prácticas que justifican la centralidad que confiere este paradigma a la corrupción, razones que, cabe anticipar, confluyen en un único y último objetivo, no siempre explicitado, que es la oposición irrestricta a toda forma de intervencionismo estatal (Astarita, 2013:172).

En resumen, parecería que mientras el gobierno mantiene el discurso confrontativo con respecto a los actores sociales que se movilaron, articuló algunas medidas vinculadas a las demandas expresadas, aunque no necesariamente en la línea que los manifestantes espera-

ban. La ausencia de una agenda de demandas concretas en las protestas y de un interlocutor claro, fue aprovechado por el gobierno para realizar una incorporación de ciertas demandas en su agenda, pero redefinidas a través de sus propias orientaciones políticas. De este modo, puede decirse que existió un moderado, y particular impacto en la agenda de políticas públicas, cuestión que será retomada en las conclusiones.

4.3 El impacto en el escenario electoral

Por último, ¿existió algo semejante en la dimensión electoral? Después de haber ganado con el 54% de los votos en 2011 y con una diferencia de más del 38% con respecto al segundo candidato más votado²⁵, en la elección de 2013 el FPV perdió su lugar de primera mayoría, para constituirse en primera minoría con un 33% de los votos a nivel nacional. Quizás el dato más significativo fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, a manos del Frente Renovador de Sergio Massa²⁶, quién obtuvo el 43.95% de los votos, frente al candidato del FPV, Martín Insaurralde que obtuvo el 32.33% de los votos. En tres de los distritos más importantes en términos político - electorales como Santa Fe, Córdoba, y Ciudad de Buenos Aires, si bien se repite una tendencia que ya se venía expresando desde 2007, la novedad la constituye la relegación del oficialismo al tercer lugar. La emergencia de una nueva fuerza política, el Frente Renovador, y la consolidación de dos fuerzas ya existentes, el

Frente Amplio Progresista (centro izquierda) y el PRO (centro derecha) permiten pensar que canalizaron el descontento expresado en el ciclo de movilizaciones callejeras que aquí analizamos. Un dato interesante son los niveles de participación electoral (79.24%) y de votos blancos y nulos (4.36%) que expresan la vigencia del actual sistema de partidos para la canalización de la preferencias ciudadanas, aún en un escenario fragmentado, donde las diferentes opciones opositoras cuentan con exigua representación y por lo tanto limitadas capacidades de consolidar una alternativa nacional de gobierno.

Pero, al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que estas protestas se producen en medio de la consolidación del PRO, como partido político en el ámbito de la CABA, y con la expectativa de la elección presidencial del presente año 2015 y la candidatura de Mauricio Macri. Más allá de la evaluación estrictamente electoral del PRO (que por ahora enfrenta algunas limitaciones para expandir territorialmente su capacidad electoral fuera de la CABA) interesa remarcar el tipo de partido que ha constituido y su vinculación con el lenguaje de estas protestas. En un interesante trabajo (Vommaro y Morresi; 2014) dan cuenta de las características de la construcción del PRO:

Es asunto de controversia en qué sentido era novedoso PRO, ya que en nuestra encuesta identificamos que la mitad de sus líderes eran políticos experimentados. Sin embargo, parece claro que PRO nació como una organización de nuevo tipo al menos en el sentido de su forma de entrada en el campo político, distinta al de otras experiencias de nuevos partidos (Hug, 2001). En efecto, PRO no se presentó como un "vocero" de una demanda puntual desatendida por los partidos mayoritarios, un "profeta" capaz de articular una nueva ideología o como un "purificador" de una ideología tradicional (Lucardie, 2000). En lugar de ello, y de un modo

25 Nos referimos a Hermes Binner por el FAP que obtuvo el 16.11 % de los votos a Presidente en 2011.

26 Intendente del Municipio de Tigre, había sido Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández, en el año 2008, luego de la crisis con el campo.

similar al que habían empleado partidos europeos como *Forza Italia* y *Res Publica*, debutó como “un partido de lo nuevo”; es decir, como un nuevo jugador que entra en el territorio de los partidos establecidos para disputar un espacio propio a partir de ofrecer, más que una nueva orientación, un cambio en las formas de hacer política (Sikk, 2011) (Vommaro y Morresi, 2014: 389)²⁷.

Esta mirada, nos indica que el PRO ha buscado hacerse eco de lo que podríamos denominar el “espíritu de estos reclamos” más que de los reclamos en sí mismo. En este sentido, en tanto colectivo esta expresión de los sectores medios y altos urbanos, son interpelados por los postulados que el PRO busca representar.

Sin embargo, podemos decir que si bien las elecciones legislativas de 2013 permiten pensar en una capitalización electoral por parte de la oposición de las movilizaciones callejeras analizadas, la decisión de los partidos políticos de no participar abiertamente en las mismas, así como el rechazo de los “ciudadanos auto convocados” a ser identificados con un referente o partido político, nos permiten suponer que la crisis de representatividad (Torre, 2003; Mustapic, 2002), y de legitimidad afecta, y mucho, a la oposición. A su vez, consideramos que estas movilizaciones no expresan una ruptura de sectores sociales y políticos otrora afines al gobierno, sino que cristalizan una polarización de la sociedad que ya se había manifestado en otras oportunidades²⁸. Distinto es el caso de los conflictos sindicales que acompañaron este proceso histórico, y

que expresaron una ruptura importante de un sector del sindicalismo que supo ser un actor estratégico del armado kirchnerista, pero que en ningún caso constituyeron el grueso de la convocatoria de las protestas mencionadas²⁹. Como señala Gamallo (2012), ambos conflictos, las movilizaciones callejeras y las protestas sindicales, no lograron trascender las identidades sociales que las promovieron, y por lo tanto, la capacidad de incidencia fue diluyéndose en la medida que el gobierno recuperó la iniciativa política.

Una expresión de los límites de esta construcción fue la marcha realizada el 18 de febrero de 2015 (18F), en torno a la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Salvo la convocatoria formal, que fue realizada por un grupo de fiscales federales, pero acompañada por los medios masivos de comunicación concentrados, y la oposición política, la marcha tuvo las mismas características que los cacerolazos anteriores. Reunió a un número considerable de ciudadanos pero que tan solo un mes después, con el mismo objetivo, otra marcha concentró a menos de 100 personas (*Tribuna Independiente*, 18/03/2015). Esto demuestra la incapacidad de construir, a partir de un reclamo específico como “justicia por la muerte del fiscal”, un movimiento político que canalice y articule todos los reclamos que se expresa-

27 Los autores han publicado luego *Mundo Pro*. (2015).

28 Según una encuesta de CEIS Consultora sobre el 18 de abril de 2013, los votantes de Cristina Fernández sólo representaron el 4% de los entrevistados, por lo que no se podría inferir una migración relevante de votos.

29 Nos referimos a la ruptura de la CGT conducida por Hugo Moyano (Sindicato Camioneros) y las protestas sindicales que se sucedieron durante 2012 - 2013. Ver Gamallo, 2012. El 20 de noviembre de 2012, la CGT opositora conducida por Moyano realizó el primer paro al gobierno de CFK. De difícil medición, puede percibirse la adhesión de sectores medios y altos, opositores, dentro de los cuales la imagen del sindicalista no era positiva cuando se encontraba dentro de la alianza de gobierno, pero que los encuentra ahora juntos en la oposición al gobierno.

ron en la primera movilización del 18F. A su vez, pone en evidencia que la fugacidad de la movilización social alrededor del tema es una característica propia de este tipo de movilizaciones que no encuentran traducción en el sistema político.

5. ¿Las movilizaciones callejeras de 2012 -2015 son expresión de un nuevo movimiento social?

Teniendo en cuenta el tipo de demandas expresadas en las protestas y su impacto en el escenario posible, nos preguntamos: ¿pueden dar lugar a la emergencia de un movimiento social que represente, organice y canalice estas demandas?

En primer lugar, habría que aclarar que los procesos de movilización que aquí analizamos, evidencian algunas características de la sociedad civil argentina en épocas kirchneristas (De Piero, 2012). Por un lado, sus altos niveles de politización y de movilización post-crisis de 2001, así como la tendencia a la ocupación del espacio público como forma de protesta (ya sea cacerolazos, piquetes, movilizaciones, escraches, etc.), claramente un repertorio de acción que se instaló en la cultura política argentina. Estas movilizaciones implicaron de una forma u otra, algún reclamo de derechos ciudadanos manifiestos o latentes pero que en estas expresiones pareciera manifestarse de modo explícito como el reclamo de víctimas (de la inseguridad, de la corrupción, de la autoritarismo del gobierno, etc.). Ahora bien, esta conciencia de derechos se inscribe necesariamente dentro de una disputa más amplia y estructural como lo es la tensión por la construcción de consensos y la redistribución de los excedentes de una sociedad (Tapia, 2009). Si bien, como vimos, emergen reclamos puntuales, ellos se explican en el marco de un planteo global al kirchnerismo en su forma como modelo político económico.

Claramente pensar a estas protestas como “estallido social” principalmente planteados por los medios de comunicación concentrados y por algunos académicos, pondera positivamente la espontaneidad de los autoconvocados, quienes habiendo sentido la necesidad de expresar su malestar social, se volcaron a la acción colectiva de protesta o contenciosa para hacer oír su voz. Esta mirada intenta construir la legitimidad de las protestas en base a su carácter “ciudadano”. Restándole valor, por *default*, a las expresiones políticas organizadas, reproduciendo la distinción neoliberal entre lo social y lo político donde lo social es visto como el reservorio moral y ético de la sociedad, mientras que lo político es asociado a los intereses sectoriales y/o individuales de la clase política. A esta mirada, donde la movilización ciudadana de las clases medias se explica por su vocación republicana, mientras la politización de los sectores populares sería por clientelismo (Casullo, 2013), subyace esta conceptualización de las movilizaciones aquí analizadas.

En un sentido similar, podríamos destacar las expresiones que caracterizan a los hechos sociales a partir de su repertorio de acción, “los cacerolazos”. Cacerolear sería entonces una clara expresión social de las clases medias, medias-altas, y altas, contra las expresiones autoritarias de la política. Su relación con la política y lo político, según estas miradas, se basaría en una distinción inicial entre los ciudadanos y “la clase política”. De ahí que estos últimos debieran participar sin banderas partidarias en las movilizaciones aquí analizadas. Esta operación de distinción, que subyace al inconsciente colectivo de nuestra sociedad, se basa en una perspectiva de la sociedad civil liberal y democrática, la cual debe constituirse en la esfera de vida social en donde las relaciones libres, autónomas y no colonizadas pueden florecer (Habermas, 1999 citado por Casullo, 2013: 99). Así como las movilizaciones que acompañaron la discusión por la reforma del sistema reten-

ciones a la exportación agropecuaria, fue personificada en “el campo”, el ciclo de protestas aquí analizado, fue personificado mayoritariamente en “la clase media, media - alta y alta”. Esta pertenencia de clase explicó, según la mirada instalada en una parte de la sociedad, el tipo de movilización –los cacerolazos–, el tipo de demanda –el rechazo al gobierno expresada en diferentes cuestiones económicas, políticas y sociales–, y la forma de organización y convocatoria –la redes sociales–.

Sin embargo, en estos análisis no se explica por qué este sector social que tradicionalmente se expresó a través del sistema político institucionalizado, expresa su descontento por fuera del mismo, con un claro sesgo anti partidario. La crisis de representación de los partidos políticos opositores y oficialistas puede ser una pista para pensar este tema y las dificultades para canalizar algunas demandas en este caso por parte de las oposiciones, expresando una crisis en las instituciones que las canalizaron; y aún no sólo los partidos, sino también las instancias que representan el resto de los intereses, que merece también una atención poca veces dada (Aguas, 2005). Como diría Tapia (2009) cuando la política institucionalizada no da respuestas, la sociedad civil las desborda. En este caso, también a los partidos de oposición.

Castells (2012) sostiene que los movimientos sociales son la fuente del cambio social, y que surgen de la humillación política, económica y cultural que ejercen los poderosos sobre los individuos y las sociedades³⁰. Una mezcla de crisis de las condiciones de vida de la población, y crisis de la legitimidad de gobierno, construye el escenario propicio para que emerjan procesos de movilización social

que den nacimiento a nuevos movimientos sociales. La humillación supone un elemento emocional individual o colectivo que funge como catalizador del proceso de movilización. Según Castells los movimientos sociales presentan una serie de características comunes que permiten pensar su constitución y consolidación como tales. La primera característica señalada es estar conectados, donde las “redes de comunicación son un elemento indispensable en la práctica y la organización de estos movimientos”. Pero, también, el autor reconoce que “son un elemento necesario aunque no suficiente de la acción colectiva” (2012: 219). En este sentido y como segunda característica, éstos se constituyen en movimiento al ocupar el espacio público. En los casos analizados, las redes de comunicación posibilitaron la convocatoria y difusión de las protestas, pero el desarrollo de las mismas y las deliberaciones de los casos analizados por Castells, acontecieron en el espacio público. Esta recuperación del espacio público como el lugar de ejercicio de la ciudadanía plena tiene que ver con la crisis de legitimidad y la necesidad de repensar la democracia. Entre las redes y el espacio público se crea lo que Castells llama el espacio de autonomía que es la forma espacial de los movimientos sociales de esta década, combinando la ocupación del espacio público y la libertad del espacio cibernético de las redes sociales. La tercera característica es su referencia local y global a la vez, justamente por ser una de red interconectada. La cuarta característica señalada es su propio tiempo atemporal, vinculada a la doble faceta de protesta y propuesta de los movimientos sociales. Es decir, su capacidad de construir resistencia pero también de proyectar a futuro la transformación social. Son movimientos no violentos y autorreflexivos, que a través de procesos de deliberación asamblearia se interrogan por sus ideas. Sin embargo, son movimientos no programáticos, ya que tienen numerosas reivindicaciones que no son posibles de expresar de forma organi-

30 Castells analiza la revolución egipcia, los levantamientos en el mundo árabe, los indignados en España y el movimiento *occupy Wall Street*.

zada y mediante un proyecto. Por último, son movimientos políticos, aunque no partidarios, porque su objetivo es la transformación de los valores de la sociedad, y lo hacen a partir de la democracia deliberativa directa basada en la democracia en red (Castells, 2012: 218). Planteadas estas dimensiones: ¿Es posible pensar el ciclo de protestas que nos convoca como expresión de un movimiento social?

Recuperando las características propuestas por Castells, si bien las protestas que componen el ciclo de 2012 - 2015 surgen del espacio de autonomía conformado por las redes sociales y se expresan en el espacio público a partir de las movilizaciones callejeras, no cumplen con las cuestiones vinculadas a su forma de organización interna ni en sus objetivos. Mientras las convocatorias eran realizadas y las concentraciones llevadas adelante, desde los principales medios de comunicación, se reiteraba la afirmación respecto a que la “gente” era convocada desde “las redes”. Estas se convierten en un nuevo “no lugar” por su anclaje ambigüo e impreciso. ¿Tienen las redes un eje articulador, una conducción? ¿Están en algún lugar? La respuesta negativa unifica estas preguntas. Las redes, su acceso e intervención desde distintos puntos y por parte de todos los que las componen (aunque no todos lo pueden hacer en la misma escala) crean la ficcional imagen de una democracia de la opinión en el ciberespacio, fuera del control del “poder” identificado con el Estado (Castells, 2012). “Las redes convocan” intenta generar un sujeto político nuevo e impersonal, por fuera de los marcos ideológicos propios de la modernidad, en la lógica izquierda - derecha, o bien más históricamente situada en los debates locales, del peronismo - antiperonismo. La negación de la política, el hecho de que los referentes de los partidos opositores no participaran orgánicamente, sino “a título personal”, la referencia permanente a las redes como fuente de convocatoria, lograba a su vez profundizar esa pertenencia ideológica difusa, no presentán-

dose como la oposición al gobierno (aunque el discurso convocante lo fuese).

Por otro lado, la falta de continuidad en el tiempo, y la ausencia de instancias de deliberación directa³¹ y de anclaje territorial (no tuvieron reuniones previas o posteriores, ni locales o sedes que les otorgaran un espacio físico de encuentro e intercambio³²), así como su inscripción exclusivamente local sin relaciones con experiencias globales (habiendo manifestaciones semejantes en países como Brasil y Venezuela, no han establecido relaciones políticas con estos grupos) y su carácter negativo (de rechazo al gobierno), pero en ausencia de elementos propositivos, hacen suponer que no es posible hablar, en términos de Castells, de un *movimiento social cacerolero*. Este objetivo que tal vez pudiera no estar presente en todos los actores que se manifestaron, sí era visible en algunos, por ejemplo en medios de comunicación. En el año 2013, fue creada la Confederación General de la Sociedad Civil; un agrupamiento que reúne a diversas fundaciones y asociaciones civiles, que comparten una concepción semejante respecto al rol de este espacio, y que claramente se ubica lejos del gobierno nacional³³. Si bien sus objetivos se encuadran en la dimensión “social”, en una editorial del diario *La Nación* del 22/11/2014, se hacía referencia al “esencial rol político de la sociedad civil”; este llamado puede ser entendido como un intento de institucionalización

31 Como en el caso de los Indignados de España analizado por el mismo Castells (2012).

32 Como demuestra Triguboff (2015) las asambleas barriales que funcionaron en Bs. As., luego de la crisis de 2001, tuvieron en las reuniones y encuentros periódicos, un espacio fundamental de construcción.

33 Ver: <http://www.forodelsectorsocial.org.ar/wp-content/uploads/2014/11/Agenda-Sociedad-Civil-Octubre.pdf>

de esta protesta, dado su fracaso en constituirse como actor político, sea como movimiento social o como grupo de presión sólido, y en su capacidad de incidir en el escenario político.

Dicho todo esto, ¿Por qué estas expresiones ciudadanas de rechazo al gobierno no se tradujeron en la emergencia de un actor que impactara en el escenario político? En las reflexiones finales vamos a intentar aproximarnos a una respuesta a este interrogante.

Reflexiones finales

En los sectores sociales interpelados por las movilizaciones callejeras inscriptas en el ciclo 13S - 8N - 18A, se generaron un cúmulo de demandas que describimos y sintetizamos en algunas medidas específicas, pero que, como señalamos, se enmarcaron en una lectura más amplia respecto del kirchnerismo y el peronismo en general. Sin embargo, esas demandas (que en las protestas se centralizaron en el “cepo” a la compra de dólares, inseguridad, corrupción y no reelección presidencial) no lograron convertirse en lo que Laclau denominó “cadena de equivalencias”, que expresara y explicara el vínculo representativo y legitimador entre los sectores sociales movilizados y los actores políticos que intentaron capitalizar el descontento social. A esto se le sumó la ausencia de un liderazgo personificado, que por otra parte los manifestantes nunca buscaron. En este sentido, las manifestaciones apuntaron a expresar demandas puntuales, enarbolando el concepto de víctima juntamente al concepto de derecho ciudadano, y a desgatar al gobierno, pero no lograron constituirse en un actor político que expresará un proyecto alternativo.

¿Por qué la oposición no consigue convertirse en un factor de poder político capaz de capitalizar esas protestas, que ambiguas y todo, reflejan cierto consenso discursivo sobre la política y el rol del Estado? Mencionamos recién las dificultades para articular las demandas desde la oposición, en un régimen

presidencial; a ello podemos sumarle la larga y no resuelta discusión sobre la crisis de representación que atraviesa el sistema político argentino desde la década de los '90, aún en el interregno kirchnerista y en el intento de éste de suturar esta cuestión. Sin duda, esta crisis, es más pronunciada en la oposición a nivel nacional como demuestran los últimos procesos electorales³⁴. Estas acciones colectivas, que buscaron construir un escenario de crisis de gobernabilidad y, por lo tanto, desgastar al gobierno nacional, tuvieron la característica de ser convocadas como “movilizaciones ciudadanas” desde el rechazo a las identidades partidarias. Este carácter regresivo de las movilizaciones seguramente posibilitó su masividad en términos de convocatoria, no así la emergencia de nuevas formas de organización o la institucionalización de liderazgos que canalicen ese descontento social. En este marco, el gobierno estableció cuál universo de demandas formaban parte de su agenda de gobierno y cuáles no. Inaugurada en el conflicto con el “campo” esta estrategia de confrontar

34 Esto puede evidenciarse en el alto nivel de dispersión con que se presentó el mapa de alianzas políticas opositoras al oficialismo en la elección legislativa nacional de 2013, y su incapacidad de construir una herramienta partidaria competitiva (aún en un escenario con un oficialismo debilitado), y de trascender fronteras locales, sectoriales y hasta de clase social que aún en 2015 continúa pesando en el escenario político nacional. En esa oportunidad, se presentaron un total de 10 armados políticos que accedieron a bancas nacionales, de los cuales 9 eran considerados opositores al gobierno. Del total de votos, el oficialismo se quedó con el 33% de los mismos, mientras que el ganador dentro de la oposición (UCR, PS y aliados) se quedó con el 21.38 % de los votos, el segundo (FR) el 17% y el PRO y el UNEN, el 9% y el 6%, respectivamente.

contra “los enemigos del pueblo” ubicó estas otras demandas sociales emergentes como intereses particulares, sectoriales, o corporativos, dificultando aún más la capacidad de la oposición de canalizar, organizar y representar este sector social movilizado.

La “desorganización de la sociedad civil”, (de un sector, más precisamente) en este marco, expresa por una parte la dificultad de estos sectores por lograr encauzar sus demandas mediante algún tipo de organización social duradera, menos aún institucionalizada, e incluso, sostener la movilización y la presencia en el espacio público, más allá de algunos eventos impactantes. Por otro lado, si bien los partidos de oposición han levantado estas demandas y las incluyen en sus plataformas electorales, tampoco puede decirse que ello vislumbre por el momento un movimiento político de transformación que, logrando ocupar el gobierno mediante el triunfo electoral, pueda llevar adelante políticas públicas consecuentes con esas demandas.

Referencias bibliográficas

Adamovsky, E. (2009). *Historia de la clase media Argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003*. Planeta: Buenos Aires.

Aguas, M. (2005). La otra cuestión de la agenda democrática. Los intereses organizados y su representación. *Revista Puente Europa*, Año III Número 3, Universidad de Bolonia, representación en Buenos Aires. 2005: 20 -27.

Astarita, M. (2014). Los usos políticos de la corrupción en la Argentina: una perspectiva histórica. *Revista Estado y Políticas Públicas*, N° 3, Año 2, Octubre de 2014: 172 -191.

Balán, P. (2014). Representación política y movilización social en la Argentina postneoliberal (2003-2013). *Revista Conflicto Social*, Año 7 N° 11, 2014: 140 -168

Biglieri, P. (2010). El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea.

La emergencia de la era kirchnerista. *Revista Stud Polí*, N°20, Año 2010: 133 -159

Biglieri, P. y Perelló, G. (2007). En el nombre del pueblo: El Populismo kirchnerista y el retorno del nacionalismo. *Documento de Trabajo N° 15*, UNSAM, San Martín.

Castells, M. (2012). *Redes de Indignación y esperanza*. Madrid: Alianza Editorial.

Casullo, M. E. (2013). Liberal, radical, o populista y clientelar: tres visiones sobre la relación entre sociedad civil y Estado en Latinoamérica. *Revista Perspectivas sobre el Estado, las políticas públicas y la gestión*. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, 2013: 96 - 111.

De Piero, S. (2013). Cortar y pegar: el kirchnerismo en el sistema político argentino. En J. Balsa (Comp.). *Discurso, política y acumulación en el kirchnerismo*. Bernal: Centro Cultural de la Cooperación y Universidad Nacional de Quilmes, 2013: 203-221.

Delamata, G. (2006). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del conurbano bonaerense*. Buenos Aires: Eudeba.

Dos Santos, M. (Comp.). (1992). *¿Qué queda de la representación política?* Caracas: CLACSO - Nueva Sociedad.

Forni, F. (Comp.). (2002). *De la exclusión a la organización: hacia la integración de los pobres en los nuevos barrios del conurbano bonaerense Buenos Aires*. Buenos Aires: CICCUS.

Gamallo, L. (2012). Entre paros y cacerolazos: Apuntes sobre la conflictividad social en la Argentina reciente. *Revista Anuario del Conflicto Social*, Universidad de Barcelona, España, 2012: 877-908.

García Delgado, D. (1994). *Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural*. Buenos Aires: Norma-FLACSO.

Gold, T. (2015). Participación ciudadana más allá de lo electoral: Cacerolazos y legitimidad en la Argentina reciente Del 13 S – al 8A. *Pensar las elecciones. Democracia, Líderes y ciudadanos*. En R. Anunziatta, R. (Comp.). Buenos Aires: CLACSO, 180- 208.

- Gómez, M. (2014). Radiografía de los movilizados contra el kirchnerismo. Resultados de una encuesta a la concurrencia del 8N. *Revista Sudamérica* Nº 3, año 2014: 76-100.
- Gradin, A. (2013). *El proceso de integración política de los Movimientos de Desocupados a la gestión del Estado en la Argentina kirchnerista: un análisis del estilo de gestión de los Programas Promotores Territoriales para el cambio Social y de Fortalecimiento y Participación de las Mujeres Juana Azurduy durante el periodo 2003-2009*. Tesis de Maestría FLACSO Argentina. Disponible en <http://politicaspublicas.flasco.org.ar/produccion-academica/el-proceso-de-integracion-politica-de-los-movimientos-de-desocupados-a-la-gestion-del-estado-en-la-argentina-kirchnerista-un-analisis-del-22>
- Grimson, A. (2013). La muerte con sangre entra. En A. Grimson y K. Bidaseca (Coords.). *Hegemonía cultural y políticas de la diferencia*. Buenos Aires: CLACSO. 2013: 65 - 78.
- Jelin, E. (1985). *Los Nuevos Movimientos Sociales en la Argentina*, I y II, Buenos Aires: CEAL.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Mauro, S. (2014). Representación política y movilización social en la Argentina postneoliberal (2003-2013). *Revista de Ciencia Política*, Vol. 52, Nº 1, 2014: 171-193.
- Muzlera, J. (2009). Quiénes son y cómo funcionan los “autoconvocados” del agro argentino. Ponencia presentada en las *VI Jornadas de Investigación y Debate: Territorio, Poder e Identidad en el Agro Argentino*, organizadas por el por el programa de Investigación I+D *La Argentina Rural del Siglo XX*, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2009 en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina.
- Novaro M. (2011). Decisionismo transicional y programático en Argentina y América Latina. Buenos Aires: Diálogo Político, Año XXVIII - Nº 2 - Konrad Adenauer Stiftung, 2011: 201-206.
- Pérez, V. y Rebon J. (2012). *Las vías de acción directa*. Buenos Aires: Aurelia Rivera.
- Schuster, F. (Comp.). (2005). *Tomar la palabra: estudios sobre protesta social en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Paidós.
- Segura, M. S. (2011). La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones en la Argentina. La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. *Revista Argumentos. Revista de crítica social. Comunicación, medios y políticas públicas*. Nº 13 octubre 2011: 82 -108.
- Sidicaro R. (2006). La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos políticos. *Cuadernos de la Argentina Reciente*, Nº 3, Buenos Aires.
- Swampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el Barrio: Las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Tapia, L. (2009). *La política salvaje*. Buenos Aires: Editorial CLACSO.
- Triguboff, M. (2015). *Asambleas Populares. Movilización social, trayectorias y prácticas políticas en Buenos Aires (2001-2006)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Vommaro G., Morresi S. y Bellotti A. (2015). *Mundo Pro la historia y la vida interna del partido de Mauricio Macri*. Buenos Aires: Planeta.
- Vommaro G., Morresi S. (2014). Unidos y diversificados: la construcción del partido PRO en la CABA. *Revista SAAP* Vol. 8, Nº 2 Noviembre, Buenos Aires: 374-417.